



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: BISMARCK PINEDA LÓPEZ
Demandado: AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO
Radicado: 05001 31 05 013 2019 00644 01
Decisión: S-212

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del abogado demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

El abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ demandó a la señora AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO, para que una vez se declare la existencia de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales para representarla en un proceso de liquidación de sociedad conyugal, sea condenada al pago de \$44`949.875

equivalentes al 25% del monto que le correspondió como gananciales, junto con la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Como fundamento de las anteriores pretensiones, afirma que la señora AMALIA MARÍA le confirió poder para continuar el trámite judicial de liquidación de sociedad conyugal en contra del señor HUMBERTO ZAPATA ARENAS que había iniciado previamente con otro abogado en el Juzgado Noveno de Familia del Circuito de Medellín, bajo el radicado 2008-00573; que realizó varias gestiones como adición al inventario de bienes que formaron parte de la sociedad conyugal; que asistió a audiencia de inventario y avalúos llevaba a cabo el 24 de septiembre de 2015 solicitando designación de partidor; que presentó incidente de objeción al inventario en varias ocasiones; que el 24 de octubre de 2017 se profirió sentencia adjudicando a cada uno de los cónyuges el 50% de los bienes inventariados; que interpuso recurso de apelación; que el 1 de marzo de 2018 se declaró la nulidad de todo lo actuado; que posteriormente se presentó un nuevo trabajo de partición que también fue controvertido; que el 23 de noviembre de 2018 se profirió nuevamente sentencia de primera instancia; que interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Superior de Medellín según sentencia del 10 de septiembre de 2019; que el monto que le correspondió a la demandada por concepto de gananciales fue de \$179`799.500; y que verbalmente se pactó que el pago de honorarios sería a cuota Litis del 25% de lo recibido por ese concepto.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, la demandada aceptó la existencia del proceso de liquidación de sociedad conyugal iniciado por otro abogado, frente al cual quedó a paz y salvo por todo concepto. También acepta que el demandante continuó con su representación luego del poder conferido. Niega que se haya pactado un porcentaje de 25% sobre los gananciales

y aclara, luego de hacer un amplio recuento de lo ocurrido dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal, que la contratación del abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ tuvo como propósito la inclusión de nuevas partidas en el activo social y que, sobre ese valor, de salir adelante las pretensiones, se le cancelarían sus honorarios profesionales. Explica también que durante el trámite del proceso el demandante recibió la suma de \$8`286.000 a pesar de que no se lograron incluir nuevos bienes al inventario que ya se había realizado y según lo solicitado en la demanda inicial, dinero con el cual debe entenderse que está a paz y salvo por todo concepto.

Se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto fue su hermano JUAN ALBERTO RESTREPO MALDONADO quien contrató al demandante para los efectos indicados y por esa representación judicial ya se le realizaron los pagos que por honorarios le correspondían. Como excepciones propuso falta de causa para pedir, pago, indebida representación judicial y mala fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2021, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ probada la excepción de pago propuesta por el apoderado de la demandada y condenó en costas al demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante presentó recurso de apelación indicando que la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos, salvo en los casos en que prime el interés público; en este caso el contrato fue verbal por voluntad de las partes y en ese momento se pactó que al final del proceso se pagaría por cuota litis. El testigo JUAN ALBERTO reconoció haber pactado los honorarios con el doctor BISMARCK PINEDA en una cuota litis del 20%

y lo recuperado por la señora AMALIA asciende a la suma de \$179.799.500. El doctor BISMARCK no especificaba en los recibos a qué proceso correspondía los abonos realizados por la señora AMALIA MALDONADO, aun así, lo pagado no corresponde al total pactado por honorarios entre las partes. La señora AMALIA en su interrogatorio manifestó que no había pagado honorarios en el proceso toda vez que este se había perdido según ella, de modo que se puede entender que la gestión profesional en este caso fue de medio y no de resultado, por lo que la obligación de la señora AMALIA era pagar los honorarios pactados por el doctor BISMARCK PINEDA.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término concedido para presentar alegatos de conclusión, los apoderados de las partes no realizaron pronunciamiento alguno.

C O N S I D E R A C I O N E S:

El contrato de mandato que regula el artículo 2142 del Código Civil, se define como aquel *"...en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera"*. A su vez el artículo 2143 ib. establece que el mandato puede ser gratuito o remunerado, y en este último caso, la remuneración puede ser determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la Ley o por el Juez de ser necesario.

En el presente caso, la señora AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO le confirió poder al hoy demandante, Dr. BISMARCK PINEDA LÓPEZ, en su calidad de abogado, para que se constituyera como su apoderado y continuara la representación dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal donde era demandado su cónyuge HUMBERTO ZAPATA ARENAS, proceso tramitado en el Juzgado Noveno de Familia de Medellín y que había comenzado desde el año 2008 cuando se

presentó la demanda por otro apoderado. Así se acredita con la documentación aportada al proceso y además lo reconocen las partes.

Significa lo anterior, que no es objeto de debate en esta instancia que el demandante prestó sus servicios profesionales como abogado de la señora AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO, aplicando todos sus conocimientos al respecto, en ejercicio de una profesión liberal cómo lo es la abogacía.

En virtud de esa representación judicial y al considerar que su labor no ha sido remunerada según lo pactado, al formularse las pretensiones el demandante solicitó expresamente el pago de unos honorarios en un porcentaje de 25% sobre el valor de los gananciales derivados de ese proceso de liquidación de sociedad conyugal, y que finalmente fueron establecidos en la suma de \$179`799.500 según la sentencia proferida el día 23 de noviembre de 2018 y que fuera confirmada en segunda instancia mediante el 10 de septiembre de 2019.

De lo que tampoco existe duda en el proceso, además de desarrollar la labor como apoderado de la demandada, es en el hecho de que las partes no firmaron ningún contrato de prestación de servicios con base en el cual pudiera determinarse de una forma clara y precisa las condiciones respecto del pago de los honorarios causados con ocasión de esa labor desempeñada por el abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ en aquel proceso que se adelantó en el Juzgado 9 de Familia del Circuito de Medellín.

Como el demandante asegura que esa estipulación quedó establecida verbalmente en términos porcentuales sobre los gananciales determinados en la sentencia, en lo que se insiste a través del recurso de apelación, corresponderá a la Sala en consecuencia analizar la prueba recaudada en el proceso para con ello establecer si tal situación quedó acreditada o si por el contrario se debe confirmar la tasación que fijó la Jueza de Primera Instancia de acuerdo a su criterio

particular, en cualquier caso, se reitera, partiendo de la base de que la labor de abogado sí se desempeñó conforme se acredita con la extensa documental aportada y que fuera detallada en la sentencia por la *a quo*.

En tal sentido, el demandante considera, de un lado, que se le adeuda el valor señalado según los gananciales distribuidos en la sentencia; de otro lado, la opositora argumenta que el abogado no logró su propósito particular de incluir nuevos bienes en el inventario y que finalmente el aprobado fue el que se presentó desde el inicio del proceso, por lo que nada se le quedó debiendo.

A propósito de lo anterior, debe recordarse como regla fundamental de carácter procesal, que es de la incumbencia de las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio, esto es, el art. 167 del Código General del Proceso y el 1757 del Código Civil, según el cual *“incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquella o estas”*

Normas en las cuales se plasma lo que se conoce como la carga de la prueba, en cuyo concepto se hace necesario distinguir 2 aspectos: a) de un lado, es una regla para el juez - o regla de juicio - porque le indica cómo debe decidir cuando no encuentra la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su fallo, y b) de otra parte, es una regla de conducta para las partes porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una de ellas le interesa probar, y puedan ser considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones. De tal manera que si quien tiene interés jurídico en que un hecho resulte probado, no lo logra, debe correr con las consecuencias adversas o desfavorables que ocasione la falta de la prueba.

En el presente caso, del material probatorio recaudado, se pueden extraer tres conclusiones fundamentales que servirán para adoptar la decisión que en derecho corresponde. 1. Que efectivamente hubo un acuerdo entre las partes sobre lo que debería ser el pago de los honorarios profesionales del abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ, aunque no de la forma como lo reclama el propio demandante; 2. Acorde a lo establecido en primera instancia, las gestiones realizadas por el profesional de derecho merecen ser remuneradas; y 3. La demandada cumplió con su obligación de pago lo que hizo a través de su hermano JUAN ALBERTO RESTREPO MALDONADO.

En otras palabras, si bien entre las partes hubo un acuerdo para que al finalizar el proceso se pagara a cuota Litis un 20%, ese porcentaje estaba condicionado al inventario adicional que se hubiera podido incluir al momento de efectuar el trabajo de partición y adjudicación dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal que se estaba adelantando, situación en la que no tuvo éxito el abogado demandante ya que no hubo inventario adicional alguno. Tampoco es posible ordenar el reconocimiento de unos honorarios profesionales aplicando un 20% sobre el total de los gananciales asignados a la señora AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO, porque ningún acuerdo en esas condiciones se logró acreditar.

De otro lado, la gestión realizada entre los años 2013 y 2019 sin duda generó un derecho a ser remunerado, pero ante la falta de estipulación entre las partes al respecto hizo bien la juzgadora de primer grado en acudir a las tarifas del Colegio de Abogados como apoyo para fijar un valor acorde a las diligencias realizadas y la naturaleza del proceso. Valor que ya fue pagado al abogado y por ende la excepción de pago ha sido bien declarada.

La fundamentación para las anteriores conclusiones debe partir del análisis del material probatorio recaudado en el proceso, especialmente el testimonio del señor JUAN ALBERTO RESTREPO MALDONADO,

hermano de la demandada y quien según ella fue el encargado de todo lo relacionado con la contratación del abogado PINEDA LÓPEZ y los pagos respectivos, siendo además la única prueba que permite comprender el alcance del acuerdo al que llegaron las partes.

En esa declaración el testigo se refirió a la contratación del demandante como abogado para los asuntos judiciales de su hermana, como un proceso de fijación de cuota alimentaria y otro de liquidación de sociedad conyugal, que es el que genera la presente controversia. En el primer caso, dice que el proceso se desarrolló entre 2013 y 2015, mientras que el de liquidación de sociedad conyugal lo tomó a finales de 2012. Agrega que nunca firmaron contrato; que el valor pactado como honorarios fue “20% sobre los inventarios adicionales”; y que si la incorporación de esos inventarios no tenía éxito “... no se pagaba nada”. Esa estipulación fue ampliamente explicada por el testigo en los siguientes términos:

“El caso de separación de bienes yo lo divido en dos partes, la primera el abogado GABIEL DEL VALLE que llevó el proceso hasta que fueron aprobados los inventarios que consistían en dos fincas y las mejoras del segundo piso de una casa, llegó hasta que los inventarios fueron aprobados y se le pagó al abogado Del Valle; luego llegó el abogado el dr. BISMARCK a mirar unas platas que aparecieron en el camino que le entraron al cónyuge de mi hermana AMALIA, que son 1. Liquidación del Banco Cafetero por retiro; 2. Retroactividad a la pensión y 3. Unos ingresos por una demanda que el señor HUMBERTO ZAPATA le hizo al Banco Cafetero y la ganó, entonces ese 20% era sobre el inventario adicional”.

A parte de esta referencia a la forma de pago de los honorarios profesionales del abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal, no existe material probatorio alguno que respalde las afirmaciones de la demanda, sin que resulte cierto como lo reclama el recurrente que las partes

acordaron un pago del 20% sobre el valor total de los gananciales asignados, pues no fue eso lo que dijo el testigo.

Es decir, no existe elementos adicionales para inferir lo contrario y que permitan imponer una condena de la forma como se pretende con la demanda, más aún cuando el trámite de aquel proceso de liquidación de sociedad conyugal da cuenta de que el inventario de bienes no sufrió ninguna modificación o adición atribuible al hoy demandante, siendo aceptada la que desde un principio se había elaborado, es decir, sin la inclusión de aquellos bienes a los que ha hecho referencia el testigo.

Entre las páginas 77 y 91 se observa el trabajo de partición y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal realizado por la partidora designada, en el que se incluyeron como primera partida las mejoras realizadas al inmueble de matrícula inmobiliaria 001-114932 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Sur por valor de \$109`599.000; como partida segunda un lote de terreno ubicado en el Municipio de Ebéjico por valor de \$50`000.00; y como partida tercera otro lote de terreno en ese mismo municipio pero por valor de \$200.000.000, lo que significa un total de \$359`999.000, por lo que el monto de los gananciales correspondiente a cada cónyuge correspondió a \$179.799.500.

A pesar de la inconformidad que en tal sentido y de manera reiterada manifestó el abogado BISMARCK PINEDA LÓPEZ, esa fue finalmente la adjudicación que se aprobó por el Juzgado de Familia sin tener en cuenta aquellos bienes del cónyuge de la demandada que se pretendían incluir, como lo reconocido por liquidación al momento del retiro del Banco Cafetero, la retroactividad de la pensión de vejez y lo que obtuvo por una demanda presentada contra ese mismo banco.

En esas condiciones, no es posible acceder a las pretensiones de la forma como fueron planteadas en la demanda, lo que implica que la decisión de primera instancia deba ser confirmada.

Un segundo aspecto que se cuestiona a través del recurso de apelación tiene que ver con la acreditación de pagos realizados al demandante producto de su actividad profesional al servicio de la demandada. Es que, a pesar de no encontrar acreditado un acuerdo como el que se estaba solicitando, es indudable que se adelantaron unas gestiones dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal adicionales a lo que se intentaba hacer con la adición al inventario de avalúos, esto es, fue necesario realizar trámites de notificación por una nulidad declarada, presentar incidentes, interponer recursos y asistir a audiencias, todo lo cual genera la causación de unos honorarios independientemente de lo que se hubiera podido pactar entre las partes.

Para ese efecto la funcionaria *a quo* estimó como tasación fundamentada en las tablas de la Corporación Colegio Nacional de Abogados CONALBOS, el equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales por tratarse de un proceso de liquidación con un patrimonio inferior a \$500.000.000 según el numeral 10.1.3, lo que no fue cuestionado en el recurso y por ende así se mantendrá en virtud del principio de consonancia que rige el procedimiento laboral. Lo que se cuestiona es el hecho del pago como tal, argumentando que los recibos firmados no dan cuenta de que correspondieran al cumplimiento de la obligación derivada de éste proceso, además de la que la demandante habría confesado que tales pagos nunca se hicieron.

A propósito de lo anterior, en lo que tiene que ver con el interrogatorio de parte que le fuera practicado a la demandada AMALIA MARÍA RESTREPO MALDONADO, en tal caso se podría extraer como confesión el hecho de afirmar que al abogado BISMARCK se le pagó una suma aproximada de 8 millones de pesos por un proceso de alimentos distinto al de liquidación de sociedad conyugal que es el que da origen a la presente demanda.

Sin embargo, no puede olvidarse el contenido del artículo 196 del Código General del Proceso cuando dispone: **“INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN Y DIVISIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DE PARTE.** *La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.*” Lo anterior para significar que la demandada fue enfática, reiterativa e insistente en afirmar que todo lo relacionado con el acuerdo de honorarios y pagos al abogado estaba a cargo de su hermano.

Así lo hace saber en varias oportunidades cuando afirma *“Eso lo hizo directamente mi hermano, él fue el que lo contrató, yo simplemente le firmé para el que fuera mi apoderado...”*. *“Yo de eso no tengo conocimiento (...) El que se encargaba de la parte del dinero era mi hermano, yo no sé nada de eso, yo no manejé esa parte, JUAN ALBERTO era el encargado”*. *“Si usted llama a mi hermano como testigo le va a aclarar todas esas partes, porque yo no tengo idea si esto es pa esto o esto es pa esto, yo no...”*

Además, en lo que a este tópico corresponde, su hermano JUAN ALBERTO RESTREPO MALDONADO explicó que le hizo unos pagos al abogado ya que *“él periódicamente me pedía dinero para su mantenimiento y entonces yo le entregaba dinero y él me entregaba el recibo”*. Además, reconoce haber elaborado un documento visible a folios 311 por el que se le preguntó en la audiencia indicando que *“cada que yo le entregaba plata él me entregaba un recibo, entonces yo periódicamente hacía una liquidación de lo que él me entregaba y lo firmaba, ese fue el último documento que hicimos”*; que *“esa suma de \$8.280.000 corresponde a los adelantos que a él se le dieron desde que empezó el proceso de liquidación de bienes y liquidación de sociedad conyugal”* y contestando finalmente que se le hacían adelantos a pesar de que se había pactado que se pagaba solo si ganaba el proceso, ya que *“Él decía que eso estaba ganado, entonces yo me confié y le hice esos adelantos”*.

Así las cosas, ninguna duda puede quedar acerca de la realización de los pagos que se aducen más aún cuando el mencionado documento de la página 311 del expediente digital por el que se le preguntó al testigo en la audiencia, contiene una relación de “*PAGOS HECHOS AL DR. BISMARCK PINEDA LÓPEZ SEPARACIÓN DE BIENES, AMALIA RESTREPO MALDONADO*”, en el que aparece un total de \$8`280.000. Documento que además contiene la firma del abogado demandante, quien reconoció su contenido y aceptó haber plasmado la firma respectiva.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 10 de noviembre de 2021.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Notificación por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **82be7d5a64b59b7c82915e8571cf1f37c18fa6337b80851475597fa04be04d6e**

Documento generado en 18/08/2022 03:13:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>